

C.A. de Santiago

Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós.

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

**PRIMERO:** Que en estos antecedentes la Defensa del imputado, recurrió de nulidad, en contra de la sentencia de fecha diez de septiembre pasado dictada por el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad que absolvió a Michael Yordan Torres Sáez, de los cargos formulados en su contra como presunto autor del delito de disparos injustificados en la vía pública, presuntamente perpetrado el 10 de marzo de 2020, en la comuna de Pudahuel, y a su turno condenó al citado Michael Yordan Torres Sáez, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio; accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; en su calidad de autor del delito de homicidio frustrado, cometido en contra de Carabinero en funciones, el día 10 de marzo del año 2020 en la comuna de Pudahuel. Además, se condenó a Michael Yordan Torres Sáez, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo; accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; en calidad de autor del delito consumado de porte de arma de fuego prohibida; cometido el día 10 de marzo del año 2020 en la comuna de Pudahuel; también se le impuso al mentado Torres Sáez la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio; accesorias de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; en calidad de autor del delito consumado de porte de municiones cometido el día 10 de marzo del año 2020 en la comuna de Pudahuel y finalmente se condenó a Michael Yordan Torres Sáez, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio; accesorias de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; en calidad de autor del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, cometido el día 10 de marzo del año 2020 en la comuna de Pudahuel.



Se resolvió que el sentenciado deberá cumplir las penas en forma real y efectiva, principiando por la de mayor extensión, a la que deberán abonársele los 915 días que ha permanecido ininterrumpidamente privado de libertad con ocasión de esta causa.

Se decretó el comiso de la droga incautada, la pistola marca Glock, pistola Jericó, 11 cartuchos balísticos, 22 cartuchos balísticos y un banano.

Por último, y conforme lo dispuesto en el artículo 17 inciso 2° de la ley 19.970, y artículo 40 del reglamento del citado cuerpo legal, se dispuso la toma de muestras biológicas al condenado a fin que se le incluya en el Registro de Condenados, debiendo oficiar al efecto al Servicio Médico Legal, entidad encargada del ingreso de la información al Sistema Nacional de Registro de ADN, una vez ejecutoriado el presente fallo.

**SEGUNDO:** La Excelentísima Corte Suprema resolvió que, según se desprende de la atenta lectura del libelo, lo que se reprocha por la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, al fallo de primera instancia, en definitiva tiene como sustento, un reclamo a la valoración de los antecedentes y a la fundamentación de la sentencia; razón por la cual, procedió en la forma que autoriza el artículo 383 de ese cuerpo legal, remitiendo los antecedentes a esta Corte de Apelaciones capitalina, para que previa revisión en cuenta de la admisibilidad del recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado, en su caso, fije audiencia para su conocimiento y fallo.

**TERCERO:** Que el defensor penal privado interpuesto recurso de nulidad fundamentado, primeramente, en la causal de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c) pues el análisis efectuado sobre la prueba rendida en el juicio oral, para dar por establecida la participación de su representado como autor del delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida no cumple con los requisitos del artículo 297 del Código Procesal Penal ni con el estándar de convicción del artículo 340 del mismo cuerpo legal, lo que se traduce en que el fallo recurrido no cumple a cabalidad con los



requisitos que le impone la letra c) del artículo 342 del indicado cuerpo legal y esto determinó que los miembros del Tribunal Oral llegaran, mediante una valoración, apartada de los parámetros que exigen las últimas dos normas citadas, a una convicción de participación que no corresponde con la conclusión que se habría obtenido de una racional e íntegra ponderación de la prueba rendida.

Expuso en su arbitrio que existe infracción al artículo 374, letra e) en relación al artículo 342 letra c), ambas disposiciones del cuerpo adjetivo de leyes en comento, toda vez que la sentencia impugnada ha sido pronunciada adoleciendo de una errónea valoración de la prueba rendida, entendiendo que la libertad de prueba y la libre apreciación de la misma en los términos del artículo 297 del Código Procesal Penal, no significa ni pudiera significar sustituir por la vía de la pura especulación, contraria al derecho penal de culpabilidad que establece la Constitución Política de la República, los fundamentos jurídicos de las más graves penas penales en nuestro ordenamiento positivo. Estimó, además la defensa que la prueba de cargo, y en especial la testimonial, por su contenido y sus contradicciones, no cumplen con el estándar y metodología de valoración que prescribe el artículo 297 del Código Procesal Penal, a saber, en base al testimonio de un funcionario policial, no son suficientes para establecer el alto estándar de convicción que necesita el sentenciador para establecer la participación de autoría de su patrocinado en el delito objeto de la acusación.

En este sentido, recordó que es el Ministerio Público quien tiene la carga de la prueba, que debe ser consistente, suficiente, pura e inequívoca a los ojos del sentenciador, necesaria para conducir a una certeza, respecto a todas y cada una de las palabras y frases de los hechos acusados, tan cierto como la efectividad del apremio que significa para el imputado la imposición real de la pena solicitada.

Aseveró que la sentencia impugnada ha sido, a su vez, pronunciada en virtud de una incompleta así como errónea apreciación y valoración de la prueba vertida: Toda vez que el tribunal ha otorgado pleno valor a la prueba de cargo no obstante las contradicciones que se



hicieron ver en su momento por la defensa, de manera que no permiten superar la presunción de inocencia y es más, constituyen una duda razonable respecto de la veracidad, solidez y coherencia del mismo.

Indicó que los errores del fallo en la valoración de la prueba bajo el estándar que exige el artículo 297, y expresamente sancionado bajo la causal de nulidad del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, causaron a su representado un grave perjuicio al condenarlo por un delito por el que debió ser necesariamente absuelto por no haberse logrado alcanzar, con la correcta valoración de la prueba rendida, e insuficiente fundamentación, el estándar de convicción para acreditar más allá de toda duda razonable la participación de su defendido en el delito imputado, lo que trajo como consecuencia que se le condenare a la pena corporal efectiva de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo.

La petición concreta del letrado en relación con esta causal alegada, esto es, aquella prevista en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c), en armonía, a su vez, esta norma con el artículo 297, es que de acuerdo a lo prescrito en el art. 386, se sirva declarar la nulidad del juicio y de la sentencia, determinado el estado en que debe quedar el procedimiento, ordenando la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado, para que este disponga la realización de un nuevo juicio oral.

En forma subsidiaria, el interviniente defensor invocó la causal absoluta de nulidad de la sentencia contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es efectuar una errónea aplicación del derecho en la dictación de la sentencia, teniendo dicha errónea aplicación influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.

Indicó que la sentencia que se recurre incurre en la causal del artículo 373 letra b) del código procesal penal en relación con el artículo 11 número 9 del Código Penal, que dice relación con la minorante de responsabilidad penal de la: “Colaboración substancial en el esclarecimiento de los hechos” y consecuentemente con la norma sobre determinación de pena prevista en el artículo 66 y 68 inciso



tercero del Código Penal. En efecto, en la sentencia de marras se ha aplicado una pena mayor a la que corresponde aplicar si se hubiere hecho una correcta inteligencia de las normas ya referidas y si se hubiera considerado por el sentenciador la referida atenuante por la concurrencia de dos circunstancias atenuantes y no haber concurrido en la especie ninguna agravante.

Señaló que tomando en consideración los fundamentos tenidos en cuenta por el tribunal para la aplicación de la pena sostuvo que se han vulnerado gravemente el derecho y los derechos de su parte, esto debido al haber denegado respecto de su representado la atenuante de responsabilidad penal prevista en el artículo 11 N° 9 del Código Penal.

Explicó que la verdad es que del propio análisis que realiza el sentenciador en la sentencia queda de manifiesto su evidente contradicción, en primer término en cuanto a que su representado renunciando a su derecho a guardar silencio prestó declaración ante el tribunal oral de manera inculpativa, es decir, asumiendo su responsabilidad de autor en el delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, del porte de arma de fuego así como de las municiones, más aún cuando en forma textual la sentencia aludida dice que el acusado reconoce la posesión de la droga y el porte del arma de fuego y de la munición.

Por otra parte, ninguno de sus dichos resultó controvertido por la prueba de cargo, de esta manera habiéndose inicialmente reconocido la existencia del hecho punible la declaración libre y auto inculpativa que hace Torres Sáez determina su participación en los hechos.

Así las cosas, entiende la parte recurrente que respecto de la pena aplicada al acusado por el tribunal se aleja de toda realidad, y por ello y ante lo evidente de las situaciones descritas y fundamentadas en el libelo recursivo es que se ha deducido el presente recurso, pues entiende que será esta Corte de Apelaciones la que restablecerá el imperio del derecho y aplicará a su defendido la pena justa, que en derecho corresponda.



Sostuvo que si atendemos a todo lo que su parte alega, es decir, a la concurrencia de la minorante de la colaboración substancial, la pena debe ser aplicada finalmente en la forma prevista en el artículo 66 inciso tercero del Código Penal, la que expresamente dispone: “Siendo dos o más las circunstancias atenuantes sin que concurre ninguna agravante, podrá imponer la pena inferior en uno o dos grados al mínimo de lo señalado por la ley, según sea en número y entidad de dichas circunstancias.

Adujo que los vicios que se aprecian en la sentencia inciden directamente en la penalidad aplicada al caso concreto, toda vez que, si bien por la redacción de las normas antes referidas resultan ser facultativa para los jueces del fondo, la verdad es que la determinación sobre la concurrencia de una atenuante debe serlo en términos objetivos, en conformidad al mérito del proceso y no a apreciaciones subjetivas o incluso arbitrarias por parte del sentenciador, si se hubieren aplicado en los términos solicitados, esto es, acogiendo no solo la de irreproachable conducta anterior sino igualmente la atenuante de la colaboración substancial por parte del imputado en el esclarecimiento de los hechos la pena signada a estos delitos *“debió ser inferior en uno o dos grados a la determinada en la sentencia, estos es, 61 días de presidio menor en su grado mínimo, 3 años de presidio menor en su grado medio por el porte de arma prohibida y 61 días de presidio menor en su grado mínimo, lo que no ocurrió en autos.”*

La petición concreta que efectúa el recurrente es que esta Corte de Apelaciones, conociendo del recurso haga lugar la causal de nulidad que se invoca, por haber incurrido el tribunal en la infracción al artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, en directa relación con el artículo 11 número 9 del Código Penal, relativo a la colaboración substancial en el esclarecimiento de los hechos y artículos 67 y 68 del Código Penal, se dicte en su reemplazo un fallo en que condene a las penas que en derecho corresponda considerando también la concurrencia de esta atenuante de responsabilidad alegada por la defensa, y aplicar a su



representado el minimum de la pena establecida en la ley rebajada en un grado,

**CUARTO:** Que de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, el juicio y la sentencia serán siempre anulados cuando, en ella se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e) del cuerpo legal en comento.

Luego, acorde la letra c), la sentencia definitiva contendrá la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones, de acuerdo con lo dispuesto **en el artículo 297** del referido Estatuto Procesal Penal. Norma, esta última, que prescribe en su inciso primero que los tribunales apreciarán **la prueba con libertad**, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados; en el inciso segundo, agrega que el tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo y, por último, el inciso tercero señala que la valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados y que esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

**QUINTO:** Que la labor de esta Corte que conoce del recurso de nulidad por la causal en análisis, **no** es en rigor efectuar una nueva valoración de la **prueba rendida competentemente en sede oral**, sino controlar que aquélla que realizaron los miembros del Tribunal del Juicio se ajuste razonablemente con la norma que les señala cómo hacerla, a qué parámetros sujetarse y qué reglas, máximas o tipos de conocimientos no contradecir.



Pues bien, en el caso de autos, la referida ponderación aparece ejecutada, satisfaciendo todas las exigencias anotadas, pudiendo afirmarse, en consecuencia, que el fallo recurrido se hizo cargo en su fundamentación de toda la prueba producida durante el juicio y que no obstante apreciarla con libertad, señaló los medios mediante los cuales dio por acreditados los hechos y circunstancias que tuvo por probados, permitiendo esta fundamentación la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que arribó.

**SEXTO:** Que, el tribunal, luego de efectuar una relación y valoración de la prueba inculpatória, a continuación fundamentó y acreditó, **más allá de toda duda razonable**, tanto el respectivo hecho punible -que se cuestiona en el presente arbitrio-, como la participación culpable y penada por la ley del acusado en el ilícito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, en los motivos **séptimo y octavo** respectivamente, en los cuales y una vez valorada la evidencia rendida, en toda su extensión, se advierte un desempeño cuidadoso en la ponderación, y en relación a cada uno de los medios aportados por los intervinientes, es posible advertir una fundamentada apreciación, la que resulta conducente a la acreditación del factum punible, como de la imputación precisa y determinada al sujeto activo por uno de los ilícitos que a la postre fue condenado, sin que se evidencie un razonamiento contrario a la lógica, para dar por establecido los extremos penales, como lo alegó el señor defensor en estrado.

En efecto, -como se dijo- en el referido fundamento **séptimo** el tribunal, luego de un lato ejercicio valorativo reflexivo y motivado, asentó en el acápite final de la referida motivación que “....*Así las cosas, de acuerdo con la prueba testimonial, pericial y otros medios de prueba, referidos precedentemente, e incorporados a la audiencia de juicio oral por el Fiscal, se acreditó que el día 10 de marzo del año 2020 el encartado fue sorprendido en la vía pública portando y transportando en la vía pública un arma de fuego prohibida y municiones, sin tener la correspondiente autorización para aquello.*”





A continuación correctamente, concluyó en el considerando octavo que “... *analizando estas juzgadoras la totalidad de la prueba de cargo producida en juicio en relación a estos ilícitos en contra de Michael Yordan Torres Sáez no tuvo otra alternativa, que calificar los hechos probados a este respecto, como los delitos de porte ilegal de municiones, contemplados en los Artículos 9 y 2 de la Ley 17.798 y de porte de arma de fuego prohibida, previsto y sancionado en los artículos 14 y 3, ambos de la misma ley 17.798, ilícitos cometidos en grado de consumado, al tenor de lo dispuesto en artículo 7º del Código Penal.*”

En lo atinente a la intervención culpable y penada por la ley del imputado, conforme al artículo 15 numeral 1º del Código Punitivo, el fallo impugnado motiva, al efecto, en el *considerando undécimo* que “... *al mismo tiempo del cúmulo de antecedentes referidos con ocasión del análisis de los cuatro delitos por los cuales se emitió veredicto condenatorio, se pudo establecer que a Michael Yordan Torres Sáez le cupo participación en calidad de autor en cada uno de dichos ilícitos, ... por haber intervenido en sus ejecuciones de una manera inmediata y directa*”

**SÉPTIMO:** Que, en relación al reproche que por el presente arbitrio se alega, en orden a que el fallo recurrido al condenar a su representado: *por un delito por el que debió ser necesariamente absuelto por no haberse logrado alcanzar, con la correcta valoración de la prueba rendida, e insuficiente fundamentación, el estándar de convicción para acreditar más allá de toda duda razonable la participación de su defendido en el delito imputado*; cabe precisar -como ha quedado anotado precedentemente- que la sentencia contiene las fundamentaciones que el señor defensor echa en falta y conforme a estas motivaciones, en las cuales se analiza el material incriminatorio en su globalidad y que fuera apreciado *directamente* por las Juzgadoras en *un contradictorio penal*, no se advierte, infracción al principio lógico de razón suficiente.

En razón de lo anterior, no es posible encontrar en los fundamentos entregados alguno que pueda estimarse que contravenga



los parámetros legales como se reprocha en el recurso, más aun teniendo presente que la nulidad del juicio y la sentencia no se justifica por una simple o mera discordancia con el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, como ocurre en este caso, con la apreciación que realiza el señor letrado recurrente, sobre la base de su propia lectura de la prueba producida en la audiencia de juicio, sino que es menester constatar una contravención a los señalados parámetros del artículo 297, lo que, como se dijo, no se aprecia en la especie, en tanto las explicaciones que se dieron para dar sustento a la decisión condenatoria resultan plausibles y por sobre todo, derribaron las barreras de la presunción de inocencia, conforme al estándar legal, de la duda razonable, atendida ***la convicción que adquirió el Tribunal del Juicio***, según prescribe el artículo 340 incisos 1° y 2° del Código Procesal Penal.

**OCTAVO:** Que en consideración de lo expuesto en el fundamento anterior no cabe sino concluir que la sentencia impugnada ha cumplido con el requisito de la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal y, por consiguiente, no ha incurrido en el motivo absoluto de nulidad de la letra e) del artículo 374 del mismo cuerpo legal, por lo que, en tales condiciones, el arbitrio interpuesto, debe ser, necesariamente, declarado sin lugar, ya que no resulta concurrente en el razonamiento de las Juzgadoras Orales una infracción al principio lógico de la razón suficiente y/o afectación a las vertientes o derivados del mentado principio lógico, según se explicó.

**NOVENO:** Que, en lo atingente al motivo de nulidad subsidiario consignado en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, efectuar una errónea aplicación del derecho en la dictación de la sentencia, teniendo dicha errónea aplicación influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, ya que el Tribunal desestimó la concurrencia de la morigerante de responsabilidad criminal del artículo 11 número 9 del Código Penal, debiendo haberse acogido la mentada atenuante; es del caso señalar que lo que realmente se pretende impugnar por esta causal subsidiaria de invalidación, es el ejercicio valoritativo del adjudicador penal oral, el que resulta ser privativo y excluyente del citado órgano



jurisdiccional, quien al conocer y juzgar el injusto punible, y en el ámbito de las circunstancias modificatorias procedentes al caso, se pronunció con los antecedentes que tuvo a la vista –inmediación- durante el juicio oral y luego de las alegaciones de los intervinientes en la audiencia especial sobre el tópico, prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, emitió una decisión, que en la especie –considerando décimo sexto, acápite final- resultó en el orden que “ *...no beneficia al sentenciado circunstancia atenuante contemplada en el No9 del Artículo 11 del Código Penal, puesto que sin perjuicio que efectivamente éste último renunció a su derecho a guardar silencio y declaró en juicio situándose en el lugar de los hechos, tal como lo indicó el ente persecutor, con la prueba de cargo sin su declaración igualmente se hubiese llegado a la misma decisión condenatoria, por ende, se deben aportar antecedentes concretos de los que carezca el Ministerio Público, o que fortalezcan indicios de cargo, pues de otra forma bastaría con declarar en el juicio oral para obtener una morigeración de pena, cuestión ... , además, en consideración que es primera vez que entrega su versión de los hechos y que su declaración la vertió en juicio luego de haberse producido toda la prueba, siendo por tanto acomodaticia,..*”

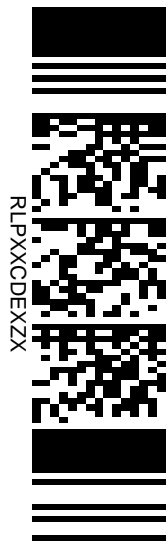
A mayor abundamiento, el presente motivo de nulidad, esto es, la errónea aplicación del derecho, debe respetar inequívocamente las premisas fácticas asentadas por los Juzgadores Orales Penales, y al respecto es explícito el Tribunal al consignar que el imputado negó en todo momento haber disparado a los agentes policiales “ *...en circunstancias que los dos funcionarios aprehensores lo sindicaron como el sujeto que en todo momento les disparó mientras ellos lo perseguían.*”

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372 y siguientes del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA**, el recurso de nulidad, deducido por la defensa del sentenciado Michael Yordan Torres Sáez, en contra de la sentencia dictada con fecha diez de septiembre pasado, dictada por el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, en los antecedentes RUC N° 2000270340-9, RIT N° 102-2022, la que en consecuencia no es nula.



Regístrese y comuníquese.  
Redacción del ministro señor Aguilar.  
**N°Penal-4805-2022.**

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada por el Ministro señor Alejandro Aguilar Brevis y por el Abogado Integrante señor José Ramón Gutiérrez Silva. No firma el Ministro señor Zepeda por encontrarse ausente.



Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Alejandro Aguilar B. y Abogado Integrante Jose Ramon Gutierrez S. Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

